

Nº. 127 AGOSTO 2018 - @cinco_ni

PERSPECTIVAS

Suplemento de análisis político

El aislamiento internacional del régimen Ortega



PERSPECTIVAS es una publicación del **Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO)**, y es parte del **Observatorio de la Gobernabilidad** que desarrolla esta institución. Está bajo la responsabilidad de Sofía Montenegro. Si desea recibir la versión electrónica de este suplemento, favor dirigirse a: cinco@cinco.org.ni

Foto: EFE

Durante los últimos meses, pero sobre todo desde que se conocen informes serios sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega contra la población, los ojos del mundo están sobre Nicaragua, y las muestras de rechazo no se han hecho esperar. Los intentos de Ortega para contrarrestar el repudio internacional han sido infructuosos. El gobierno ha terminado sentado en el banquillo de los acusados en más de una ocasión y aislado de la comunidad internacional.

Una verdad irrefutable

Desde el 21 de mayo de 2018, cuando la misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por su Secretario Ejecutivo y la Relatora Especial para el país, presentaron su informe preliminar, la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega contra la población durante las jornadas de protesta que se iniciaron el 18 de abril, se convirtió en una verdad irrefutable. El 22 de junio, la CIDH presentó su informe final titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua” ante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificando y ampliando su informe anterior. La represión estatal ha sido tan elevada y sus consecuencias tan graves, que la CIDH decidió crear varios instrumentos, entre ellos: el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), el Grupo de Internacional de Expertos Independientes (GIEI), la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna Integrada (SACROI) y un sitio web específico para el país.

La misión de observación de la CIDH visitó el país entre del 17 al 21 de mayo a invitación del gobierno, como parte de los acuerdos surgidos del Diálogo; así mismo sucedió con la instalación del MESENI y el GIEI, y la llegada posterior de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos las Naciones Unidas (OACNUDH). Esta última misión presentó un informe propio sobre la situación en Nicaragua a finales de agosto. El documento titulado “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, ratifica los informes de la CIDH, confirma la represión del gobierno y propuso la conformación de una comisión internacional de investigación o una comisión de la verdad nacional e internacional para asegurar la verdad, justicia y reparación a las víctimas.

En mayo, Amnistía Internacional presentó también su informe sobre la situación en Nica-

ragua, coincidiendo en sus resultados con los informes de CIDH y OACNUDH. Los tres documentos sintetizan la situación del país como una crisis de derechos humanos y una crisis humanitaria por varias razones: la cantidad de personas muertas, que no ha podido terminarse; la cantidad de personas heridas; el número de personas detenidas, una buena parte de ellas secuestradas y sometidas a desaparición forzada antes que las autoridades reconozcan su detención; el número de desaparecidos; la cantidad de personas sometidas a juicios arbitrarios e irregulares y las miles de personas que han huido escapando de la represión y la violencia estatal.

El gobierno ha rechazado sistemáticamente los informes elaborados hasta el punto que decidió suspender la invitación a la misión de OACNUDH, una forma velada de expulsión, inmediatamente después de conocerse el informe. Además, ha promovido una campaña de estigmatización contra los defensores de derechos humanos que incluye al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y la relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola; y persiste en su estrategia de represión contra las marchas y movilizaciones de protesta, así como en las acciones de represalia contra los líderes del movimiento ciudadano.

Las resoluciones inevitables

Luego que el mundo comenzó a enterarse de las graves violaciones a los derechos humanos en el país, las declaraciones de rechazo y los llamados al gobierno para que cese la represión y se haga justicia, no se hicieron esperar. Dos de los foros internacionales más importantes han sido la OEA y Naciones Unidas. Desde junio a la fecha, la OEA, como foro hemisférico, ha emitido una declaración y tres resoluciones. El primer pronunciamiento se produjo el 5 de junio y se conoce como “Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua. Fue aprobada por la Asamblea General de la organización en un contexto en el que Nicaragua todavía era percibida claramente como un país donde los derechos humanos estuviesen en crisis. La declaración, aparte de deplorar la violencia, hace un llamado al gobierno para una salida negociada a la crisis, al establecimiento del GIEI y la misión de la OEA para las reformas electorales. La razón por la cual esta declaración es importante reside en que expresa una alta preocupación del foro hemisférico por la situación del país y la voluntad de seguir de cerca la evolución de la crisis.

El segundo pronunciamiento de la OEA fue una resolución aprobada por el Consejo Per-



manente el 18 de julio, y cuyo título “La situación de Nicaragua”, resume el interés y la preocupación de la organización sobre la crisis del país. Nuevamente insistió al gobierno la búsqueda de una solución negociada a través del diálogo, respaldó a la Conferencia Episcopal como mediadora y el trabajo de la CIDH, así como la misión de la OEA para la reforma electoral. En este caso, la cantidad de países que votaron a favor de la resolución mostró ya la soledad de las posiciones oficiales del gobierno nicaragüense.

El 2 de agosto se reunió nuevamente el Consejo Permanente y frente al agravamiento de la crisis, aprobó una nueva resolución en la que se conformó un “Grupo de Trabajo para Nicaragua” integrado por doce países, entre ellos: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú. El grupo fue creado para coadyuvar “al proceso de diálogo nacional en Nicaragua, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización, del SICA y de otros actores regionales e internacionales”. El gobierno de Nicaragua rechazó la creación del grupo y una eventual visita al país. El Grupo de Trabajo para Nicaragua se pronunció el primero de septiembre y ha realizado varias reuniones.

La última resolución de la OEA sobre la situación del país fue aprobada el 12 de septiembre, con el nombre “Acontecimientos recientes en Nicaragua”. Esta resolución contiene varios puntos críticos: insiste en la necesidad de reinstalar el diálogo; urge y exhorta al gobierno de Nicaragua a investigar, tomar medidas y reparar el daño a las víctimas, así como la colaboración con los mecanismos de la CIDH y la OACNUDH; y llama a los estados miembros de la OEA a adoptar las medidas que consideren necesarias para restablecer el Estado de

Derecho y la protección de los derechos humanos. Este punto, según el análisis de expertos en el tema, abre la puerta para que distintos gobiernos apliquen sanciones económicas a Nicaragua.

Otros foros donde también se ha abordado la situación de Nicaragua con gran preocupación es el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el primer caso, el Alto Comisionado y otros funcionarios expresaron su consternación por la situación del país en diferentes ocasiones, la más reciente de ellas, cuando la nueva Alta Comisionada, Michelle Bachelet, asumió el cargo. El 5 de septiembre, el tema de Nicaragua fue abordado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a propuesta de Estados Unidos. Aunque Rusia, China, Bolivia y Etiopía argumentaron que la situación no representaba una amenaza a la seguridad internacional; los demás países del Consejo expresaron su preocupación por la gravedad de la situación, la calificaron como una crisis de derechos humanos, insistieron en la búsqueda de una salida negociada y lamentaron la decisión del gobierno de “expulsar” a la misión de OACNUDH. Otras declaraciones de altos funcionarios de Naciones Unidas, incluido el Secretario General, Antonio Guterres, aunque breves, son bastante claras respaldando el diálogo y la salida negociada a la crisis.

Mientras tanto, en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), las posiciones han sido bastante tímidas, aunque no de abierto respaldo a Ortega. Aunque el organismo de integración regional se ha pronunciado en favor del cese de la violencia y la salida negociada en un par de ocasiones; varios de los países integrantes como Guatemala, El Salvador, Honduras y el propio secretario, Vinicio Cerrezo, han optado por mantener una posición más bien de abstención o apoyo tibio. Desde el

punto de vista de algunos análisis, la posición de estos países se debe a su cercanía política o similitudes con el gobierno Ortega; mientras que la posición de Cerezo en tanto secretario del SICA responde también a su cercana relación con Ortega, y la querrían aprovechar para sustituir a la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadora en el diálogo.

Estados Unidos: un actor principal

Entre todos los actores de la comunidad internacional, Estados Unidos es uno de los más destacados, sino el principal. Ese papel se lo ha asignado el propio Ortega al convertirlo en interlocutor validado de sus discursos, declaraciones y acciones. También es cierto que el gobierno de Estados Unidos tiene una influencia significativa sobre otros países del hemisferio y del mundo, de tal manera que sus posicionamientos sobre un país o un tema en particular son escuchados por todos. Así ha sucedido en el caso de Nicaragua.

Las primeras declaraciones fueron bridas tempranas por el vicepresidente Mike Pence, sin embargo, fueron bastante generales, probablemente porque el movimiento de protesta y movilización apenas estaba comenzando y las consecuencias de la represión todavía no eran visibles. Las posiciones norteamericanas comenzaron a endurecerse a partir de junio cuando promovieron la aprobación de una declaración sobre la situación del país en la Asamblea Permanente de la OEA; más adelante, decidieron incluir a otros tres funcionarios nicaragüenses en la lista Magnitsky: Francisco Díaz, director de la policía; Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía y señalado como una de las cabezas de los grupos paramilitares; y Francisco López, tesorero del FSLN y Albanisa. Ellos se sumaron al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, incluido en la lista en diciembre pasado. Además, Estados Unidos también retiró las visas a unos 50 funcionarios gubernamentales y personas allegadas al régimen.

En la medida que arreciaron las acciones de represión por parte del gobierno Ortega contra los manifestantes y se conocieron sus graves consecuencias, Estados Unidos fue endureciendo sus posiciones y discursos, de tal manera que el gobierno norteamericano promovió la aprobación de las resoluciones aprobadas por el Consejo Permanente de la OEA y la conformación del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua. Así mismo, promovió que el tema fuera abordado en el Consejo de Seguridad de la ONU aprovechando que asumió la presidencia pro tempore del mismo.

Las declaraciones de diversos funcionarios

del gobierno norteamericano también se han vuelto más frecuentes y duras. Entre ellas, varios congresistas que promueven la aprobación de la llamada Nica Act, que impondría sanciones económicas a Nicaragua. Una de las últimas declaraciones fue ofrecida por el mismo presidente Donald Trump ratificando la posición de Estados Unidos que demanda el cese de la represión, el reinicio del diálogo y el restablecimiento de la democracia.

Otras declaraciones importantes

A las resoluciones y pronunciamientos de los foros hemisféricos y mundiales se han sumado las declaraciones de actores como el Parlamento Europeo y el propio Papa Francisco. Otros gobiernos se han referido al tema de manera bilateral y numerosas organizaciones de izquierda de diferentes países latinoamericanos como de Europa, así como grupos de reconocidos académicos también abogan por el cese de la violencia estatal y el respaldo al diálogo.

En diferentes partes del mundo también se han realizado acciones globales en apoyo al movimiento ciudadano y en rechazo al gobierno Ortega; algunas de esas acciones son la Caravana de la Solidaridad, que ha recorrido varios países de Europa y gran parte de Sudamérica, dos vigiliadas globales en distintas partes del mundo; marchas, manifestaciones y actos prácticamente en todo el mundo, así como acciones de incidencia ante distintos foros internacionales.

Nicaragua también se ha convertido en un tema de primera plana para los medios internacionales más importantes de todo el mundo, de manera que las principales cadenas de televisión, diarios y radios han dedicado numerosos análisis y reportajes especiales sobre la situación del país; sin mencionar que numerosos medios más pequeños o locales en todo el mundo también han divulgado noticias sobre Nicaragua de manera sistemática. Hoy por hoy, tal como en los años 80, en el país se encuentran corresponsales de los medios internacionales más reconocidos en el mundo, es noticia de todos los días y el mundo tiene sus ojos en lo que sucede.

Los infructuosos esfuerzos de Ortega

Desde los primeros días de abril, cuando Ortega se dio cuenta que su estrategia de represión y control no funcionaba, y que la ola de protestas y movilización social era incontenible, comenzó a aparecer en público con algu-



na frecuencia, justificando sus acciones. Estas comparecencias en ambientes controlados y plazas públicas prefabricadas se volvieron cada vez más frecuentes en la medida que las evidencias de la brutal represión contradecían todos los discursos, especialmente después que se conocieron los informes de la CIDH y Amnistía Internacional, así como las primeras reacciones de condena de parte de la comunidad internacional.

En diferentes momentos, Ortega envió a sus funcionarios más cercanos a tratar de convencer a la comunidad internacional de sus argumentos, tal como hizo el ministro asesor para política y asuntos internacionales de la presidencia, Sidhartha Marín que encontró las puertas de los gobiernos europeos cerradas y con un claro mensaje; su secretario privado Paul Oquist, que no logró convencer a la opinión pública ni al gobierno de Estados Unidos luego de varias entrevistas a la prensa; el canciller Denis Moncada y el vicescanciller Valdrack Jaentschke, a pesar de sus intervenciones en la OEA y la ONU, así como sus agasajos a los países caribeños.

Sus infructuosos intentos de suscitar respaldo y apoyo internacional obligaron al propio Ortega a salir de su encierro mediático y ofrecer una serie de entrevistas a algunas de las más importantes cadenas de televisión internacional como Fox News, Telesur, Euronews, CNN, DW y France24; sin embargo, sus erráticas y variables respuestas a preguntas sensibles como los supuestos orígenes de la crisis, las fuentes de financiamiento del supuesto "golpe de estado" y la naturaleza de los grupos paramilitares, terminaron desacreditándolo aun más frente a la comunidad internacional. En una última entrevista, anunció su intención de participar en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas y entrevistarse directamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la actualidad, sus apoyos son más bien

escuálidos y provienen de países de credibilidad comprometida entre la comunidad internacional: Venezuela, Cuba, Bolivia; algunos vecinos centroamericanos y los lejanos Rusia y China.

Un callejón con una única salida

A la vuelta de cinco meses, Ortega está visiblemente aislado de la comunidad internacional. Ha acumulado en tiempo récord, una buena cantidad de resoluciones de rechazo en los más altos foros internacionales. Su errático discurso culpando a diferentes actores de la crisis no ha logrado convencer a nadie, pero sobre todo, lo ha dejado en evidencia como mentiroso y como un gobernante poco responsable.

En la medida que sus argumentos se han visto refutados por la contundencia de los informes elaborados por la CIDH y la OACNUDH, su discurso se ha reducido sensiblemente a la persistente y consabida retórica antimperialista y reduce la crisis a una supuesta contienda entre su gobierno y Estados Unidos, negándose a reconocer su responsabilidad directa en la crisis y la mayoritaria demanda de cambio de parte de la sociedad nicaragüense. Desde esa perspectiva, evade también la responsabilidad de encontrar una salida negociada al interior del país, restableciendo el diálogo y reconociendo la participación de todos los actores sociales.

Evidentemente, Estados Unidos y la comunidad internacional utilizarán todos los recursos y mecanismos de la diplomacia preventiva y el derecho internacional que están a su alcance para presionar a Ortega de manera que retome el diálogo y el país pueda volver a la senda de la democracia. Ortega se ha colocado a él mismo en un callejón donde la única salida es sentarse a negociar con Nicaragua.